



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura



La protección del
patrimonio cultural
subacuático

Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (París, 2001)

Directrices para la ratificación
(Se incluye el texto de la Convención de 2001)

I. ¿Por qué era necesaria una Convención?.....	3
II. ¿Cómo se creó la Convención de 2001?	3
III. Proceso de adhesión a la Convención	4
a. Proceso en el plano nacional	4
b. Proceso en el plano internacional.....	6
IV. Formulación de reservas y declaraciones	8
V. Entrada en vigor de la Convención	10
VI. Cumplimiento de la Convención	11
VII. Bibliografía	13
ANEXO I Modelo de instrumento de ratificación / aceptación / aprobación / adhesión	15
ANEXO II Texto de la Convención de 2011 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.....	16

I. ¿Por qué era necesaria una Convención?

Se entiende por «**Tratado**» un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. El término «**Convención**» significa que el texto en cuestión es un tratado internacional que contiene declaraciones de principios, reglas y normas oficiales. Todo Estado soberano tiene la capacidad de celebrar convenciones y adherirse a ellas.

La Convención de 2001 *sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO* (en adelante, «**la Convención de 2001**») fue aprobada por los Estados Miembros de la UNESCO para combatir el saqueo desmesurado, la explotación comercial y el tráfico ilícito o inmoral del patrimonio cultural subacuático. Se trata de un instrumento completo, que trata íntegramente estas cuestiones en todas las aguas. Amplía la protección jurídica de los lugares *in situ* y prohíbe la recuperación y el tráfico ilícitos o inmorales de objetos. La Convención responde asimismo a las necesidades de orientación científica y cooperación entre Estados que han expresado los Estados Miembros. No incluye reglas sobre la propiedad del patrimonio ni modifica zonas marítimas. Contiene principios, normas, directrices de trabajo y un sistema para proteger este patrimonio de forma completa y eficaz.

II. ¿Cómo se creó la Convención de 2001?

En términos generales, una convención internacional se crea mediante:

- su negociación;
- su aprobación; y
- el establecimiento del texto auténtico y definitivo.

«Negociación»

La necesidad cada vez mayor de disponer de una reglamentación o de introducir cambios en el contexto internacional conduce a menudo a pedir que se elaboren convenciones nuevas. Cuando esto sucede, las organizaciones internacionales, los institutos especializados o los Estados realizan reuniones de expertos, estudios y conferencias para negociar un texto que resulte aceptable para un número razonable de países interesados.

La Convención de 2001 se elaboró respetando el procedimiento oficial previsto para las convenciones de la UNESCO. Concretamente, se presentó un estudio preliminar de la cuestión al Consejo Ejecutivo, que incluyó la propuesta en el orden del día de la Conferencia General. Seguidamente, se emitió un dictamen positivo sobre la conveniencia de crear una nueva convención. A continuación, el Director General elaboró un informe tomando en consideración los comentarios de los Estados Miembros y que contenía un borrador de la convención; envió este informe a los Estados Miembros y, tal y como había decidido la Conferencia General, a un comité especial de expertos gubernamentales. La Conferencia General estudió el borrador del texto recibido y, considerándolo idóneo, aprobó el instrumento.

«Aprobación»:

En general, el texto de una convención se aprueba mediante el consentimiento de un número razonable de Estados respecto del texto redactado.

Dado que la Convención de 2001 es una convención de la UNESCO, para su aprobación se exigió una mayoría de dos tercios de la Conferencia General. La aprobación tuvo lugar el 2 de noviembre de 2001 en la Conferencia General de la UNESCO en París.

«Autenticación del texto»:

En general, el establecimiento de un texto auténtico y definitivo indica que los Estados interesados lo consideran un registro correcto de lo acordado y tienen intención de llegar a ser parte del mismo en el futuro. Demuestra además que los Estados que han dado su acuerdo con el texto no tienen intención de adoptar ninguna medida que entre abiertamente en conflicto con él. No obstante, ningún Estado queda obligado por la convención hasta que la ratifica.

Al tratarse de una convención de la UNESCO, la aprobación de la Convención de 2001 en la Conferencia General sustituyó a la firma por los Estados contratantes, que suele ser necesaria para la autenticación del texto de otras convenciones, y estableció ya el texto definitivo abierto a la ratificación¹.

III. Proceso de adhesión a la Convención

Tras su aprobación, la Convención de 2001 no se aplica automáticamente a todos los Estados Miembros de la UNESCO. Solo se aplica a los países que se declaran legalmente obligados por ella. Entonces se convierten en «Parte» en la Convención.

En general, los pasos para adherirse a una convención son los siguientes:

- la consideración política de su ratificación en el plano nacional;
- un proceso de autorización nacional (por parte del Parlamento o institución similar) en el que se faculta al poder ejecutivo del Estado para consentir en obligarse por la convención; y
- la manifestación externa del consentimiento del Estado en obligarse por la convención, en el plano internacional.

A continuación, se expone en detalle el proceso:

a) Proceso en el plano nacional

➤ Consideración política

En general, el primer paso para que un Estado pase a ser parte de una convención consiste en lograr el apoyo político para la ratificación (cuestión que varía según las particularidades del país). Por lo general, son los ministros competentes y las partes interesadas correspondientes quienes adoptan medidas o son consultados al respecto.

En el caso de la Convención de 2001, los ministros competentes son, por ejemplo, el Ministro de Cultura y el Ministro de Relaciones Exteriores. En general, estos deben estudiar el texto de la Convención de 2001 y decidir si desde el punto de vista político resulta conveniente pasar a ser parte de la misma. También se consulta a partes interesadas y a grupos de interés. Entre ellos cabe citar arqueólogos, historiadores, institutos que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural subacuático, museos, empresas turísticas, empresas de buceo y profesionales, como buzos aficionados, empresas de pesca, abogados, la Marina y otros.

¹ Véase el Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del Artículo IV de la Constitución, disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=21681&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

La **consideración** política implica aspectos como:

- la necesidad de la Convención (es decir, volumen del patrimonio cultural subacuático en costas nacionales, amenazas existentes, necesidad de apoyo científico, etc.);
- los intereses existentes en la sociedad local;
- la economía y la cultura;
- la seguridad nacional;
- la legislación nacional de salvamento en vigor;
- las cuestiones relativas al derecho del mar (véase en concreto la interacción con la UNCLOS); y
- los intereses comerciales y de defensa.

Entre las **ventajas** que puede reportar la adhesión a la Convención de 2001 figura su contribución a:

- la intensificación de la lucha contra el creciente saqueo del patrimonio cultural subacuático;
- la adhesión a un sistema internacional de protección efectiva del patrimonio;
- la obtención de una posición más sólida en relación con los proyectos de excavación meramente comerciales y la actuación en favor de la sociedad local y de los conocimientos científicos;
- la garantía de una cooperación entre Estados y de intercambio de experiencias;
- la aprobación o revisión de la legislación de conformidad con las normas internacionales y la participación más activa en la protección del patrimonio cultural;
- la concesión de una mayor visibilidad y reconocimiento al patrimonio cultural subacuático;
- el apoyo a una industria nacional basada en actividades relacionadas con el patrimonio cultural subacuático y la promoción del turismo (por ejemplo, el buceo); y
- la conservación del valor simbólico del patrimonio cultural para la identidad nacional.

Ejemplo:

Portugal posee un patrimonio cultural subacuático muy rico. Entre 1993 y 1995, su legislación permitía la venta de objetos procedentes de excavaciones subacuáticas arqueológicas. Debido a esa legislación, como mínimo seis empresas internacionales de búsqueda de tesoros se establecieron en el país para explotar el patrimonio cultural subacuático de sus costas. La legislación se declaró inaplicable en 1995 y se derogó en 1997, por lo que hubo un renacimiento de la arqueología subacuática científica en el país. Para proteger mejor su patrimonio cultural subacuático de la explotación comercial y la destrucción, y cooperar con otros Estados, Portugal se adhirió a la Convención de 2001.

➤ **Autorización oficial al poder ejecutivo para declarar que el Estado consiente en obligarse por la Convención**

El Estado que prevé adherirse a una convención debe respetar para ello su propio derecho nacional. En la mayoría de los casos esto implica que hay que autorizar al poder ejecutivo (el Gobierno y/o el Jefe del Estado) para que declare que el Estado consiente en obligarse por la convención.

Los detalles procedimentales de esta autorización dependen del ordenamiento jurídico del país. A veces se puede promulgar una ley o un decreto, en otros casos basta con un acto del parlamento y, de conformidad con el derecho nacional de algunos países, incluso se podría cumplir esta obligación mediante la publicación oficial de la ley de ratificación.

➤ *Cuestión distinta es el cumplimiento por el Estado de las normas de la convención mediante la incorporación de las mismas en el derecho nacional. Se trata del problema del cumplimiento sustantivo de las normas de la convención a que el Estado estará vinculado en el futuro.. Esta cuestión no afecta al proceso de ratificación (formal) como tal (es decir, al proceso de adhesión del Estado a la convención). La obligación de cumplimiento sustantivo de las normas de la convención resulta de la adhesión a esta y no es una condición previa para tal adhesión.*

En todo caso, una vez que el Estado ha pasado a ser parte de la convención y esta ha entrado en vigor, el Estado debe cumplirla.

Puesto que la Convención de 2001 es un tratado internacional, todo Estado que quiera adherirse a ella debe examinar su derecho nacional para responder a la siguiente pregunta: ¿qué autorización interna se necesita para que el poder ejecutivo pueda declarar que consiente en obligarse por la Convención que se va a ratificar, aprobar o aceptar, o a la que se va a adherir?

➤ **Ejemplo:**

La Constitución alemana prevé en su artículo 59 II que los tratados internacionales que tengan influencia en el derecho federal requieren el consentimiento o la colaboración de las autoridades competentes en forma de ley federal. El Presidente de Alemania solo puede firmar un instrumento de ratificación si previamente se ha aprobado tal ley.

b) Proceso en el plano internacional

➤ **Declaración externa del consentimiento del Estado en obligarse por la convención**

Para ser parte en una convención, el Estado interesado debe declarar de forma externa en el plano internacional su voluntad y consentimiento en obligarse por esta.

«Ratificación», «Aceptación», «Aprobación» y «Adhesión»:

Este consentimiento puede expresarse de variadas formas, como la firma, el canje de instrumentos constitutivos del tratado o cualquier otra que se acuerde. El consentimiento del Estado en obligarse por la convención se expresa mediante la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión cuando estos son los actos elegidos como actos de expresión del

consentimiento (de acuerdo con el texto de la convención, durante la firma mediante la expresión de la intención del Estado o de otro modo). Esta es la práctica habitual².

El instrumento en el que se declara el consentimiento debe darse a conocer a la entidad o persona elegida como destinataria de la declaración. Puede tratarse del resto de los Estados Partes de la convención, de un depositario o de cualquier otra entidad.

En el caso de la Convención de 2001 el depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante la UNESCO viene a declarar que el Estado en cuestión consiente en obligarse por la Convención y es un requisito obligatorio para ser parte en ella.

En efecto, en virtud de la Convención, la UNESCO es **depositaria** de esas declaraciones (lo que significa que deben enviarse a la Organización, en lugar de a todos los demás Estados que la hayan adoptado o a otra organización)³. En el caso de la Convención de 2001, para ser parte de ella no basta, pues, con la simple firma de la misma, ni con el canje de instrumentos constitutivos del tratado entre los Estados interesados. La UNESCO es, por tanto, la autoridad responsable para aceptar las declaraciones de ratificación de la Convención y solo surten efecto jurídico los instrumentos depositados ante la ella.

El instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión debe enviarse a la siguiente dirección:

UNESCO
Director General
7, place de Fontenoy
75352 París 07 SP Francia
Tel.: +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 68 16 90

En todo caso, la declaración por la que el Estado consiente en obligarse por la Convención de 2001 debe hacerse por escrito y de forma expresa; no es posible una aceptación implícita.

Debe depositarse el **original** del instrumento, no basta con una copia.

Existe una diferencia entre los distintos instrumentos

- Los Estados Miembros de la UNESCO pueden ratificar, aceptar o aprobar la Convención de 2001.
- Los Estados no miembros pueden adherirse a ella.

Si se elige un término incorrecto en el instrumento de ratificación, la UNESCO se pondrá en contacto con el Estado por carta para aclararlo y asegurarse de que se elige el término correcto.

Además, determinados territorios mencionados en la Convención de 2001 también pueden adherirse a dicho tratado.

² "Ratificación", "aceptación", "aprobación" y "adhesión" son términos distintos; no obstante, su efecto final en el derecho internacional es el mismo.

³ La función de depositario de una Convención de la UNESCO suele recaer en el Director General de la propia UNESCO; sin embargo, en el caso de otros instrumentos jurídicos de la UNESCO también puede recaer en el Secretario General de las Naciones Unidas. Es lo que sucede cuando el instrumento se ha aprobado bajo los auspicios conjuntos de la UNESCO y otra u otras organizaciones.

La cuestión está regulada en el artículo 26 de la Convención de 2001:

1. La presente Convención estará sujeta a la **ratificación, aceptación o aprobación** de los Estados miembros de la UNESCO.
2. La presente Convención estará sujeta a la **adhesión**:
 - a) de los Estados que no sean miembros de la UNESCO pero que sean miembros de las Naciones Unidas o de un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado al que la Conferencia General de la UNESCO haya invitado a adherirse a la presente Convención;
 - b) de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán **depositados** ante el Director General

Se adjunta un **modelo** de instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en el ANEXO I de estas directrices.

➤ Ejemplo:

En el caso del ejemplo ya mencionado de Alemania, la ratificación (es decir, la declaración externa de que Alemania consiente en obligarse por la Convención de 2001) correspondería al Presidente del país, tendría lugar después de la entrada en vigor de la ley federal correspondiente y se produciría mediante la firma del instrumento de ratificación para su entrega al depositario de la Convención de 2001, es decir, el Director General de la UNESCO. Tras la ratificación del texto de la Convención, se publicaría en el Boletín Oficial del Gobierno de Alemania.

IV. Formulación de reservas y declaraciones

En general, cuando un Estado se adhiere a una convención puede formular una reserva.

Una reserva es una declaración unilateral (cualquiera que sea su enunciado o denominación) hecha por un Estado por la que se excluyen o modifican los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de la convención cuando se aplican a dicho Estado.

No se puede formular una reserva si

- está prohibida por la convención en cuestión;
- la convención dispone que únicamente pueden formularse determinadas reservas, y entre ellas no figura la reserva en cuestión, o
- la reserva es incompatible con el objeto y la finalidad de la convención.

La reserva establecida con respecto a otra parte modifica las disposiciones de la convención en lo que respecta a las relaciones entre el Estado que formula la reserva y la otra parte (la modificación es válida en la misma medida para esta otra parte).

La reserva no modifica las disposiciones de la convención en lo que respecta a las relaciones con las otras partes o entre ellas.

Cuando un Estado que formula una objeción a una reserva no se ha opuesto a la entrada en vigor de la convención entre él mismo y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a las que se refiere la reserva no se aplican en las relaciones entre ambos Estados en la medida determinada por la reserva.

A menos que la convención indique lo contrario, una reserva podrá retirarse en cualquier momento y no se requiere el consentimiento de los Estados que la hayan aceptado. Asimismo, salvo que la convención indique lo contrario, una objeción a una reserva podrá retirarse en cualquier momento.

La Convención de 2001 contiene varias normas relacionadas con las declaraciones, limitaciones y reservas que el Estado que tenga intención de ratificar la Convención debe tener en cuenta:

Artículo 9 – Información y notificación en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental

1. *Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental de conformidad con la presente Convención.*

En consecuencia:

- a) *Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus nacionales o un buque que enarbore su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, el nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o actividad.*
- b) *En la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de otro Estado Parte:*
 - i) *los Estados Partes exigirán que el nacional o el capitán del buque les informe e informe al otro Estado Parte de ese descubrimiento o actividad;*
 - ii) *alternativamente un Estado Parte exigirá que el nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o actividad y asegurará la transmisión rápida y eficaz de esa información a todos los demás Estados Partes.*

2. *Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, un Estado Parte declarará la forma en que transmitirá la información prevista en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.*

3. *Etc.*

Artículo 28 – Declaración relativa a las aguas continentales

Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o adherirse a ella o en cualquier momento ulterior, todo Estado o territorio podrá declarar que las Normas se aplicarán a sus aguas continentales que no sean de carácter marítimo.

Artículo 29 – Limitación del ámbito de aplicación geográfico

Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un Estado o territorio podrá declarar ante el depositario que la presente Convención no se aplicará a determinadas partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial e indicará en esa declaración las razones que la motivan. En la medida de lo posible, y tan pronto como pueda, el Estado deberá reunir las condiciones necesarias para que la presente Convención se aplique a las zonas especificadas en su declaración; a esos efectos, y en cuanto haya reunido esas condiciones, retirará también total o parcialmente su declaración.

Artículo 30 – Reservas

Salvo lo dispuesto en el artículo 29, no se podrán formular reservas a la presente Convención.

Por lo que respecta a las reservas previstas en los artículos 29 y 30, deben formularse por escrito y comunicarse a la UNESCO. Además, la retirada de una reserva o de una objeción a una reserva debe realizarse por escrito.

Las reservas y las declaraciones formuladas por un Estado que pase a formar parte de la Convención de 2001 deben registrarse en una carta que acompañará al instrumento de ratificación/ aceptación/ aprobación/ adhesión y no deben excluirse del propio instrumento.

V. Entrada en vigor de la Convención

Por lo general, el texto de la convención establece la condición para su entrada en vigor, que se produce normalmente cuando hay un número determinado de Estados que han declarado que consienten en obligarse por ella. Una vez alcanzado el número acordado, la convención entra en vigor para los Estados que han pasado a ser parte de ella. Posteriormente, la convención va entrando en vigor para otros nuevos Estados en la fecha de depósito de su instrumento respectivo (o una vez transcurrido un tiempo determinado después del depósito, si así lo indica el texto de la convención).

En el caso de la Convención de 2001, esta cuestión está regulada por el artículo 27:

La Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento a que se refiere el artículo 26, pero únicamente respecto de los veinte Estados o territorios que hayan depositado sus instrumentos. Entrará en vigor para cualquier otro Estado o territorio tres meses después de la fecha en que dicho Estado o territorio haya depositado su instrumento.

La Convención de 2001 entró en vigor en 2009. Para conocer la situación de las ratificaciones de la Convención de 2001, se puede consultar el sitio web www.unesco.org/en/underwater-cultural-heritage.

VI. Cumplimiento de la Convención

Es necesario incorporar las disposiciones de la convención en el derecho interno para que el Estado cumpla las obligaciones que asume al declarar oficialmente que está vinculado por ella.

En caso de que la convención no haya entrado en vigor en el momento en que el Estado pase a ser parte de ella, en sentido estricto no incumplirá sus obligaciones contractuales si no respeta sus normas, pero en todo caso estará obligado a no actuar contra los principios de la misma. En el momento en que la convención entre en vigor, el Estado estará legalmente obligado a cumplir sus normas y adaptar en consecuencia su derecho nacional.

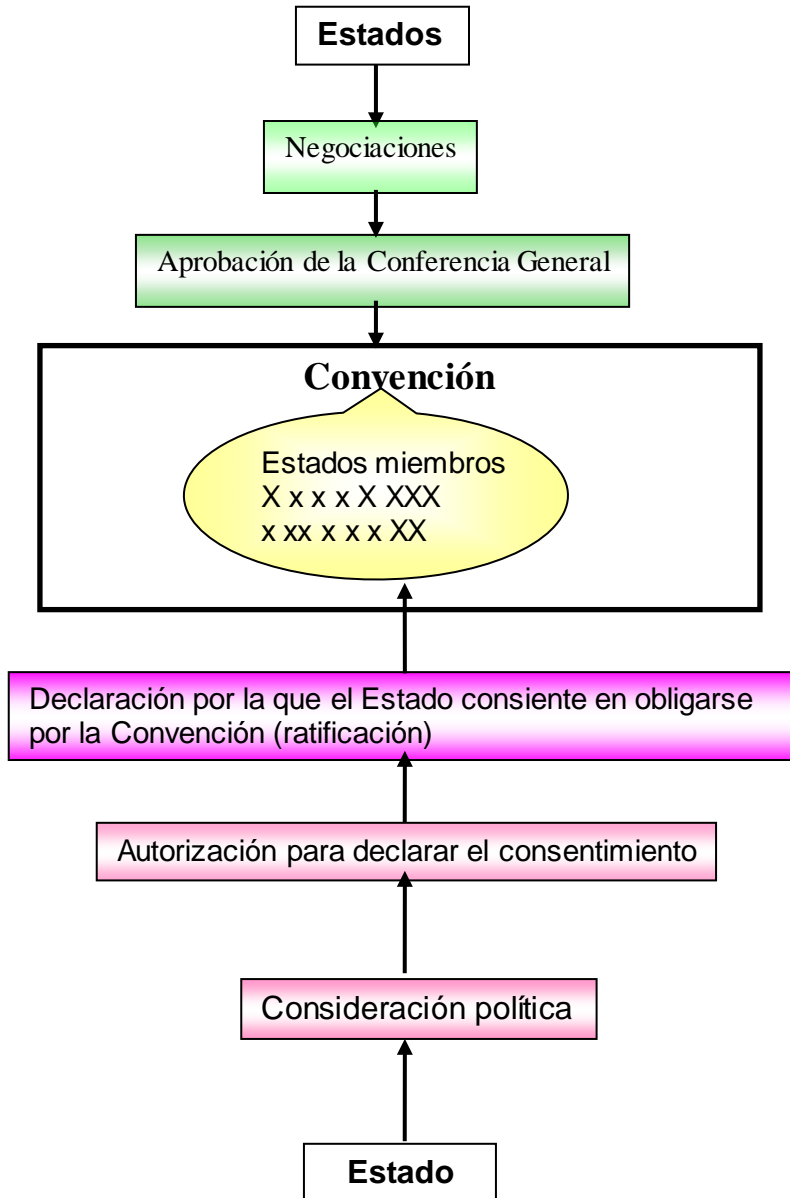
La puesta en práctica de la convención puede realizarse de varias formas:

- haciendo una referencia global a su texto;
- reproduciendo su contenido como derecho nacional; o
- adaptando simplemente el derecho nacional vigente.

Ello puede realizarse al tiempo que se promulga la ley o el decreto que autoriza la declaración por la que el Estado consiente en obligarse por la convención, o en una legislación específica.

En el caso de la **Convención de 2001**, el Estado que desee aplicar sus normas puede estudiar la posibilidad de promulgar una ley nueva sobre el patrimonio cultural subacuático, recoger las normas de la Convención en su ley nacional sobre el patrimonio cultural en vigor, incluir las normas principales de la Convención en una ley nacional y la parte administrativa de las normas en directrices administrativas, o adaptar otras disposiciones nacionales vigentes. En el sitio web de la Convención de 2001 figura un modelo de ley de aplicación.

Creación y adhesión - Convención de 2001



VII. Bibliografía

Sobre las ratificaciones:

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: fue aprobada el 22 de mayo de 1969 y abierta a la firma el 23 de mayo de 1969 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Tratados. La Conferencia se convocó en virtud de las resoluciones 2166 (XXI) de 5 de diciembre de 1966 y 2287 (XXII) de 6 de diciembre de 1967 de la Asamblea General. Entró en vigor el 27 de enero de 1980, de conformidad con el artículo 84.1). Texto: Naciones Unidas, Serie de tratados, vol. 1155, p.331. <http://www.worldtradelaw.net/misc/viennaconvention.pdf>

Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, 21 de marzo de 1986, <http://www.un.org/law/ilc/texts/trbtstat.htm>

Sobre la Convención de 2001:

Beurier, J.-P., «Pour un droit international de l'archéologie sous-marine», in *Revue générale de droit international public*, 1989, pp. 45-68

Blot, J.-Y., *L'histoire engloutie ou l'archéologie sous-marine*, Gallimard, 1995

Brown, E.D., «Protection of the Underwater Cultural Heritage. Draft Principles and Guidelines for Implementation of Article 303 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982», in *Marine Policy*, Vol. 20, Issue 4, July 1996, pp. 325-336

Carducci, G., «New Developments in the Law of the Sea: the UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage», in *American Journal of International Law*, n. 2, May 2002

«La Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo», in RDI, 2002, p. 53

Consejo de Europa, The Underwater Cultural Heritage, *Report of the Committee on Culture and Education, Parliamentary Assembly*, Document 4200 – Le Patrimoine culturel subaquatique, *Rapport du Comité sur la culture et l'éducation, Assemblée parlementaire*, document 4200, Strasbourg, 1978

Delgado, J. P. (ed.), *Encyclopaedia of Underwater and Maritime Archaeology*, London, British Museum Press, 1997, 493 p.

Dromgoole, S. (ed.), *Legal Protection of the Underwater Cultural Heritage: National and International perspectives*, The Hague, Kluwer Law International, 1999, 239 p.

Fletcher-Tomenius, P., Williams, M., «The Draft UNESCO/DOALOS Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage and Conflict with the European Convention on Human Rights», in *International Journal of Nautical Archaeology*, Vol. 28, n. 2, May 1999, pp. 145-153

Garabello, R., *La Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio culturale subacqueo*, Milano, Giuffrè, 2004

Goy, R., «L'épave du Titanic et le droit des épaves en haute mer», in *Annuaire Français de Droit International*, 1989, pp. 753-773

Leanza, U., «Zona archeologica marina», pp. 41-70, in **Francioni, F., Del Vecchio, A., De Caterini, P. (eds.)**, *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, Giuffrè Editore, 2000, 210 p.

Martin, C., *An Introduction to Marine Archaeology*,
www.bbc.co.uk/history/archaeology/marine_1.shtml, as of 15.09.2005

O'Keefe, P.J., *Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage*, Leicester, Institute of Art and Law, 2002, 206 p.

Paine, L. P., «*Ships of the World: an Historical Encyclopaedia*» - with essays by James H. Terry and Hal Fessenden and a foreword by Eric J. Berryman, Houghton Mifflin Company 1997, available at
http://college.hmco.com/history/readerscomp/ships/html/sh_000106_shipsofthewo.html.

Prott, L.V., Srong, I. (eds.), *Background Materials on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, UNESCO, The Nautical Archaeological Society, Paris – Portsmouth, 1999, 210 p.

Prott, L.V., Planche, E., Roca-Hachem, R. (eds.), *Background Materials on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, UNESCO, Ministère de la Culture et de la Communication (France), Paris, 2000, 616 p.

Scovazzi, T., Garabello, R. et. al., *The Protection of Underwater Cultural Heritage*, 2003, Leiden/Boston, USA

Strati, A., *Draft Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage: A Commentary prepared for UNESCO*, Paris, UNESCO, 1999, 97 p. (Doc. CLT-99/WS/8)

Treves, T., «Stato costiero e archeologia marina», in *Rivista di diritto internazionale*, 1993, p. 698

UNESCO, *Preliminary Study on the advisability of preparing an international instrument for the protection of the Underwater Cultural Heritage – Etude préliminaire sur l'opportunité d'élaborer un instrument international sur la protection du patrimoine culturel subaquatique*, Paris, UNESCO, 1995, 20 p. (Doc. 28C/39) + Add.

Yturriaga, B. de, *Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático*, in Drnas de Clément (coord.), *Estudios de Derecho Internacional en homenaje al Profesor Ernesto J. Rey Caro*, Córdoba, 2003, p. 451

ANEXO I

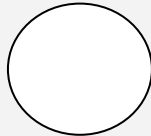
Modelo de instrumento de ratificación / aceptación / aprobación / adhesión

Considerando que la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001) está abierta a [ratificación/aceptación/aprobación/adhesión] por parte de [nombre del país] en los términos establecidos en el artículo 26,

El Gobierno de [nombre del país], habiendo visto y examinado dicha Convención, declara [ratificar/aceptar/aprobar/adherirse a] la misma y se obliga a observar fielmente sus disposiciones.

EN FE DE LO CUAL, firma y sella el presente instrumento.

Hecho en, el día.....



(Sello)

(Firma)
El Jefe de Estado
o el Jefe de Gobierno
o el Ministro de Asuntos Exteriores

ANEXO II

Texto de la Convención de 2011 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático

París, 2 de noviembre de 2001

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 31ª reunión, celebrada en París del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001,

Reconociendo la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio común,

Consciente de la importancia de proteger y preservar ese patrimonio cultural subacuático y de que la responsabilidad de esa tarea incumbe a todos los Estados,

Observando el creciente interés y aprecio del público por el patrimonio cultural subacuático,

Convencida de la importancia que la investigación, la información y la educación tienen para la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático,

Convencida de que el público tiene derecho a gozar de los beneficios educativos y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio cultural subacuático *in situ* y de que la educación del público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio,

Consciente de que el patrimonio cultural subacuático se ve amenazado por actividades no autorizadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de medidas más rigurosas para impedir esas actividades,

Consciente de la necesidad de dar una respuesta adecuada al posible impacto negativo en el patrimonio cultural subacuático de actividades legítimas que puedan afectarlo de manera fortuita,

Profundamente preocupada por la creciente explotación comercial del patrimonio cultural subacuático y, especialmente, por ciertas actividades que tienen por objetivo la venta, la adquisición o el trueque de patrimonio cultural subacuático,

Consciente de la disponibilidad de tecnología de punta que facilita el descubrimiento del patrimonio cultural subacuático y el acceso al mismo,

Convencida de que la cooperación entre los Estados, organizaciones internacionales, instituciones científicas, organizaciones profesionales, arqueólogos, buzos, otras partes interesadas y el público en general es esencial para proteger el patrimonio cultural subacuático,

Considerando que la prospección, extracción y protección del patrimonio cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional, requiere un acceso a métodos científicos especiales y la aplicación de éstos, así como el empleo de técnicas y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan criterios rectores uniformes,

Consciente de la necesidad de codificar y desarrollar progresivamente normas relativas a la protección y la preservación del patrimonio cultural subacuático conformes con el derecho y la práctica internacionales, comprendidas la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la UNESCO el 14 de noviembre de 1970, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO el 16 de noviembre de 1972 y la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,

Resuelta a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas en el ámbito internacional, regional y nacional con objeto de preservar *in situ* el patrimonio cultural subacuático o, de ser necesario para fines científicos o para su protección, de proceder cuidadosamente a la recuperación del mismo,

Habiendo decidido en su 29ª reunión, que esta cuestión sería objeto de una convención internacional,

Aprueba el día 2 de noviembre de 2001, la presente Convención.

Artículo 1 – Definiciones

A los efectos de la presente Convención:

1. a) Por «patrimonio cultural subacuático» se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:

- i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;
- ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y
- iii) los objetos de carácter prehistórico.

b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar.

c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso.

2. a) Por «Estados Partes» se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse por esta convención.

b) Esta convención se aplicará *mutatis mutandis* a los territorios mencionados en el apartado b) del párrafo 2 del Artículo 26 que lleguen a ser Partes en esta

Convención de conformidad con los requisitos definidos en ese párrafo; en esa medida, el término «Estados Partes» se refiere a esos territorios.

3. Por «UNESCO» se entiende la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

4. Por «Director General» se entiende el Director General de la UNESCO.

5. Por «Zona» se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

6. Por «actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático» se entiende las actividades cuyo objeto primordial sea el patrimonio cultural subacuático y que puedan, directa o indirectamente, alterarlo materialmente o causarle cualquier otro daño.

7. Por «actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático» se entiende las actividades que, a pesar de no tener al patrimonio cultural subacuático como objeto primordial o secundario puedan alterarlo materialmente o causarle cualquier otro daño.

8. Por «buques y aeronaves de Estado» se entiende los buques de guerra y otros navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que, en el momento de su hundimiento, fueran utilizados únicamente para un servicio público no comercial, que sean identificados como tales y que correspondan a la definición de patrimonio cultural subacuático.

9. Por «Normas» se entiende las Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, tal y como se mencionan en el Artículo 33 de la presente Convención.

Artículo 2 – Objetivos y principios generales

1. La presente Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático.

2. Los Estados Partes cooperarán en la protección del patrimonio cultural subacuático.

3. Los Estados Partes preservarán el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, de

conformidad con lo dispuesto en esta Convención.

4. Los Estados Partes, individual o conjuntamente, según proceda, adoptarán todas las medidas adecuadas conformes con esta Convención y con el derecho internacional que sean necesarias para proteger el patrimonio cultural subacuático, utilizando a esos efectos, en función de sus capacidades, los medios más idóneos de que dispongan.

5. La preservación *in situ* del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio.

6. El patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y gestionará de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo.

7. El patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial.

8. De conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques y aeronaves de Estado.

9. Los Estados Partes velarán por que se respeten debidamente los restos humanos situados en las aguas marítimas.

10. Un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático *in situ* con fines de observación o documentación, deberá ser alentado para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio así como el reconocimiento y la protección de éste, salvo en caso de que ese acceso sea incompatible con su protección y gestión.

11. Ningún acto o actividad realizado en virtud de la presente Convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional.

Artículo 3 – Relación entre la presente Convención y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas.

Artículo 4 – Relación con las normas sobre salvamento y hallazgos

Ninguna actividad relacionada con el patrimonio cultural subacuático a la que se aplica la presente Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, a no ser que:

- a) esté autorizada por las autoridades competentes, y
- b) esté en plena conformidad con la presente Convención, y
- c) asegure que toda operación de recuperación de patrimonio cultural subacuático se realice con la máxima protección de este.

Artículo 5 – Actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático

Cada Estado Parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático.

Artículo 6 – Acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales

1. Se alentará a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos existentes, con objeto de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos esos acuerdos

deberán estar en plena conformidad con las disposiciones de la presente Convención y no menoscabar el carácter universal de ésta. En el marco de esos acuerdos, los Estados Partes podrán adoptar normas y reglamentos que aseguren una mejor protección del patrimonio cultural subacuático que los adoptados en virtud de la presente Convención.

2. Las Partes en esos acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales podrán invitar a adherirse a esos acuerdos a los Estados que tengan un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

3. La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones en materia de protección de buques sumergidos que incumban a los Estados Partes en virtud de otros acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, concertados antes de la aprobación de la presente Convención, máxime si están en conformidad con los objetivos de esta.

Artículo 7 – Patrimonio cultural subacuático en aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial

1. En el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial.

2. Sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y normas de derecho internacional aplicables a la protección del patrimonio cultural subacuático, los Estados Partes exigirán que las Normas se apliquen a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático situado en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial.

3. En sus aguas archipelágicas y mar territorial, en el ejercicio de su soberanía y de conformidad con la práctica general observada entre los Estados, con miras a cooperar sobre los mejores métodos de protección de los buques y aeronaves de Estado, los Estados Partes deberían

informar al Estado del pabellón Parte en la presente Convención y, si procede, a los demás Estados con un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, del descubrimiento de tales buques y aeronaves de Estado que sean identificables.

Artículo 8 – Patrimonio cultural subacuático en la zona contigua

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 303 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las Normas.

Artículo 9 – Información y notificación en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental

1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental de conformidad con la presente Convención.

En consecuencia:

a) Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus nacionales o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, el nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o actividad.

b) En la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de otro Estado Parte:

i) los Estados Partes exigirán que el nacional o el capitán del buque les informe e informe al otro Estado Parte de ese descubrimiento o actividad;

ii) alternativamente un Estado Parte exigirá que el nacional o el capitán del buque le informe de ese

descubrimiento o actividad y asegurará la transmisión rápida y eficaz de esa información a todos los demás Estados Partes.

2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, un Estado Parte declarará la forma en que transmitirá la información prevista en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Un Estado Parte notificará al Director General los descubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático que sean puestos en su conocimiento en virtud del párrafo 1 del presente artículo.

4. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier información que le sea notificada en virtud del párrafo 3 del presente artículo.

5. Todo Estado Parte podrá declarar al Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural subacuático, su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio. Esa declaración deberá fundarse en un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

Artículo 10 – Protección del patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental

1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, salvo lo dispuesto en el presente artículo.

2. Un Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural subacuático tiene derecho a prohibir o a autorizar cualquier actividad dirigida a este patrimonio para impedir cualquier intromisión en sus derechos soberanos o su jurisdicción reconocidos por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de un Estado Parte, o se tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio cultural subacuático, ese Estado Parte:

a) consultará a todos los demás Estados Partes que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del Artículo 9 sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático;

b) coordinará esas consultas como «Estado Coordinador», a menos que declare expresamente que no desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del Artículo 9 designarán a un Estado Coordinador.

4. Sin perjuicio de la obligación de todos los Estados Partes de proteger el patrimonio cultural subacuático mediante la adopción de todas las medidas viables conformes al derecho internacional, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, incluido el saqueo, el Estado Coordinador podrá adoptar todas las medidas viables y/o conceder cualquier autorización que resulte necesaria de conformidad con la presente Convención y, de ser necesario, con anterioridad a las consultas, con el fin de impedir cualquier peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Al adoptar tales medidas se podrá solicitar la asistencia de otros Estados Partes.

5. El Estado Coordinador:

a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en práctica esas medidas;

b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así acordadas de conformidad con las Normas, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al

Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte expedirá esas autorizaciones;

c) podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones sin demora a los demás Estados Partes.

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador actuará en nombre de los Estados Partes en su conjunto y no en su interés propio. Esta acción en sí no podrá ser invocada para reivindicar derecho preferente o jurisdiccional alguno que no esté reconocido por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del presente artículo, no se efectuará ninguna actividad dirigida a un buque o aeronave de Estado sin el acuerdo del Estado del pabellón y la colaboración del Estado Coordinador.

Artículo 11 – Información y notificación en la Zona

1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la Zona, de conformidad con la presente Convención y con el Artículo 149 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, cuando un nacional de un Estado Parte o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, ese Estado Parte exigirá que su nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o de esa actividad.

2. Los Estados Partes notificarán al Director General y al Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos los descubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio cultural

subacuático de que hayan sido informados.

3. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier información de este tipo suministrada por los Estados Partes.

4. Un Estado Parte podrá declarar al Director General su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio cultural subacuático. Dicha declaración deberá fundarse en un vínculo verificable con ese patrimonio cultural subacuático, habida cuenta en particular de los derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico.

Artículo 12 – Protección del patrimonio cultural subacuático en la Zona

1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el presente artículo.

2. El Director General invitará a todos los Estados Partes que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 4 del Artículo 11 a efectuar consultas sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un Estado Parte para coordinar esas consultas como «Estado Coordinador». El Director General invitará asimismo a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a participar en esas consultas.

3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas las medidas viables conforme a la presente Convención, de ser necesario, antes de efectuar consultas, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo.

4. El Estado Coordinador:

a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en práctica dichas medidas;

y

b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así acordadas de conformidad con la presente Convención, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte expedirá dichas autorizaciones.

5. El Estado Coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones a los demás Estados Partes.

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador actuará en beneficio de toda la humanidad, en nombre de todos los Estados Partes. Se prestará especial atención a los derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico con respecto al patrimonio cultural subacuático de que se trate.

7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará actividades dirigidas a un buque o aeronave de Estado en la Zona sin el consentimiento del Estado del pabellón.

Artículo 13 – Inmunidad soberana

Los buques de guerra y otros buques gubernamentales o aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana y sean utilizados con fines no comerciales, en el curso normal de sus operaciones, y que no participen en actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no estarán obligados a comunicar descubrimientos de patrimonio cultural subacuático en virtud de los Artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención. Sin embargo, al adoptar medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de operación de sus buques de guerra u otros buques gubernamentales o aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana y que se utilicen con fines no comerciales, los Estados Partes velarán por que tales buques procedan,

en cuanto sea razonable y posible, de manera compatible con lo dispuesto en los Artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención.

Artículo 14 – Control de entrada en el territorio, comercio y posesión

Los Estados Partes tomarán medidas para impedir la entrada en su territorio, el comercio y la posesión de patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria a la presente Convención.

Artículo 15 – No utilización de las zonas bajo jurisdicción de los Estados Partes

Los Estados Partes adoptarán medidas para prohibir la utilización de su territorio, incluidos sus puertos marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción o control exclusivos, en apoyo de cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente Convención.

Artículo 16 – Medidas referentes a los nacionales y los buques

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas viables para asegurar que sus nacionales y los buques que enarbolan su pabellón no procedan a ninguna actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente Convención.

Artículo 17 – Sanciones

1. Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto de las infracciones de las medidas que haya adoptado para poner en práctica la presente Convención.

2. Las sanciones aplicables respecto de las infracciones deberán ser suficientemente severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Convención y desalentar la comisión de infracciones cualquiera que sea el lugar, y deberán privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilícitas.

3. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud del presente artículo.

Artículo 18 – Incautación y disposición de patrimonio cultural subacuático

1. Cada Estado Parte adoptará medidas destinadas a la incautación de elementos de patrimonio cultural subacuático situado en su territorio, que haya sido recuperado de una manera no conforme con la presente Convención.

2. Cada Estado Parte registrará, protegerá y tomará todas las medidas que resulten razonables para la estabilización de patrimonio cultural subacuático incautado en virtud de la presente Convención.

3. Cada Estado Parte notificará toda incautación de patrimonio cultural subacuático realizada en virtud de la presente Convención al Director General de la UNESCO y a cualquier otro Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

4. Un Estado Parte que haya incautado patrimonio cultural subacuático velará por darle una disposición acorde con el bien general, tomando en consideración los imperativos de conservación e investigación, la necesidad de reunir las colecciones dispersas, así como la necesidad del acceso, la exposición y educación públicos y los intereses de cualquier Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

Artículo 19 – Cooperación y utilización compartida de la información

1. Los Estados Partes deberán cooperar entre sí y prestarse asistencia para velar por la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en virtud de la presente Convención, incluyendo cuando sea posible, la colaboración en la exploración, la excavación, la documentación, la conservación, el estudio y la presentación de ese patrimonio.

2. En la medida en que sea compatible con los objetivos de esta Convención, cada Estado Parte se compromete a compartir con otros Estados Partes información en relación con el patrimonio cultural subacuático, incluida la referente al descubrimiento de ese patrimonio, su localización, el patrimonio extraído o recuperado de manera contraria a esta Convención o que viole otras disposiciones del derecho internacional, la metodología y las técnicas científicas pertinentes y la evolución del derecho aplicable al patrimonio de que se trate.

3. Toda información compartida entre Estados Partes, o entre la UNESCO y Estados Partes, relativa al descubrimiento o localización de patrimonio cultural subacuático se mantendrá con carácter confidencial y se comunicará exclusivamente a las autoridades competentes de los Estados Partes, en la medida en que sus respectivas legislaciones nacionales lo permitan, y en tanto la divulgación de esa información pueda poner en peligro o amenazar de alguna manera la preservación de ese patrimonio cultural subacuático.

4. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables, para difundir información sobre el patrimonio cultural subacuático extraído o recuperado de manera contraria a esta Convención o en violación de otras disposiciones del derecho internacional, incluyendo, cuando sea posible, la utilización de bases de datos internacionales apropiadas.

Artículo 20 – Sensibilización del público

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables para que el público tome conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio cultural subacuático, así como de la importancia que tiene su protección en virtud de esta Convención.

Artículo 21 – Formación en arqueología subacuática

Los Estados Partes cooperarán para impartir una formación en arqueología subacuática, en las técnicas de preservación del patrimonio cultural

subacuático y, conforme a los términos acordados, en la transferencia de tecnologías relacionadas con el patrimonio cultural subacuático.

Artículo 22 – Autoridades competentes

1. A fin de velar por la correcta puesta en práctica de esta Convención, los Estados Partes establecerán autoridades competentes o, en su caso, reforzarán las ya existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario del patrimonio cultural subacuático y garantizar eficazmente la protección, la conservación, la presentación y la gestión del patrimonio cultural subacuático, así como la investigación y educación.

2. Los Estados Partes comunicarán al Director General el nombre y la dirección de sus autoridades competentes en materia de patrimonio cultural subacuático.

Artículo 23 – Reunión de los Estados Partes

1. El Director General convocará una Reunión de los Estados Partes en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente por lo menos una vez cada dos años. A petición de una mayoría de los Estados Partes, el Director General convocará una Reunión Extraordinaria de los Estados Partes.

2. La Reunión de los Estados Partes decidirá sobre sus funciones y responsabilidades.

3. La Reunión de los Estados Partes aprobará su propio Reglamento.

4. La Reunión de los Estados Partes podrá crear un Consejo Consultivo Científico y Técnico compuesto por expertos designados por los Estados Partes, con la debida atención al principio de distribución geográfica equitativa y a la conveniencia de un equilibrio entre los sexos.

5. El Consejo Consultivo Científico y Técnico prestará la asistencia adecuada a la Reunión de los Estados Partes sobre las cuestiones de índole científica y técnica relacionadas con la puesta en práctica de las Normas.

Artículo 24 – Secretaría de la Convención

1. El Director General será responsable de la Secretaría de la presente Convención.

2. Las funciones de la Secretaría incluirán las siguientes tareas:

a) organizar las Reuniones de los Estados Partes previstas en el párrafo 1 del Artículo 23; y

b) prestar asistencia a los Estados Partes en la puesta en práctica de las decisiones de las Reuniones de los Estados Partes.

Artículo 25 – Solución pacífica de controversias

1. Cualquier controversia entre dos o más Estados Partes acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención deberá ser objeto de negociaciones de buena fe o de otros medios de solución pacífica de su elección.

2. Si dichas negociaciones no resolvieran la controversia en un plazo razonable, los Estados Partes de que se trate podrán, de común acuerdo, someterla a la mediación de la UNESCO.

3. Si no se recurriera a la mediación o si ésta no resolviera las controversias, las disposiciones relativas a la solución de controversias enunciadas en la Parte XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se aplicarán *mutatis mutandis* a toda controversia entre Estados Partes en la presente Convención respecto de la interpretación o la aplicación de esta Convención, independientemente de que sean o no también Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

4. Todo procedimiento escogido por un Estado Parte en la presente Convención y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud del Artículo 287 de esta última, se aplicará a la solución de controversias en virtud del presente artículo, a menos que ese Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención o al adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior, haya elegido otro procedimiento

en virtud del Artículo 287 para la solución de controversias derivadas de la presente Convención.

5. Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior, un Estado Parte en la presente Convención que no sea Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar podrá elegir libremente, mediante una declaración escrita, uno o varios de los medios enunciados en el párrafo 1 del Artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la solución de las controversias con arreglo al presente artículo. El Artículo 287 se aplicará a esa declaración así como a toda controversia en la que ese Estado sea Parte y que no esté amparada por una declaración en vigor. A efectos de conciliación y arbitraje, de conformidad con los Anexos V y VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese Estado estará habilitado para designar conciliadores y árbitros que se incluirán en las listas mencionadas en el Artículo 2 del Anexo V y en el Artículo 2 del Anexo VII para la solución de las controversias derivadas de la presente Convención.

Artículo 26 – Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Miembros de la UNESCO.

2. La presente Convención estará sujeta a la adhesión:

a) de los Estados que no sean miembros de la UNESCO pero que sean miembros de las Naciones Unidas o de un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado al que la Conferencia General de la UNESCO haya invitado a adherirse a la presente Convención;

b) de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia

de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Director General.

Artículo 27 – Entrada en vigor

La Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento a que se refiere el artículo 26, pero únicamente respecto de los veinte Estados o territorios que hayan depositado sus instrumentos. Entrará en vigor para cualquier otro Estado o territorio tres meses después de la fecha en que dicho Estado o territorio haya depositado su instrumento.

Artículo 28 – Declaración relativa a las aguas continentales

Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o adherirse a ella o en cualquier momento ulterior, todo Estado o territorio podrá declarar que las Normas se aplicarán a sus aguas continentales que no sean de carácter marítimo.

Artículo 29 – Limitación del ámbito de aplicación geográfico

Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un Estado o territorio podrá declarar ante el depositario que la presente Convención no se aplicará a determinadas partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial e indicará en esa declaración las razones que la motivan. En la medida de lo posible, y tan pronto como pueda, el Estado deberá reunir las condiciones necesarias para que la presente Convención se aplique a las zonas especificadas en su declaración; a esos efectos, y en cuanto haya reunido esas condiciones, retirará también total o parcialmente su declaración.

Artículo 30 – Reservas

Salvo lo dispuesto en el artículo 29, no se podrán formular reservas a la presente Convención.

Artículo 31 – Enmiendas

1. Un Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante comunicación dirigida por escrito al Director General. El Director General transmitirá la comunicación a todos los Estados Partes. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación, la mitad por lo menos de los Estados Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General presentará dicha propuesta para examen y posible aprobación de la siguiente Reunión de los Estados Partes.

2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes.

3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.

4. Las enmiendas a esta Convención entrarán en vigor únicamente para los Estados Partes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas tres meses después de que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte o territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

5. Un Estado o territorio que llegue a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas efectuadas de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una intención diferente, será considerado:

a) Parte en esta Convención así enmendada; y b) Parte en la Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por la enmienda.

Artículo 32 – Denuncia

1. Un Estado Parte podrá denunciar esta Convención mediante comunicación dirigida por escrito al Director General.

2. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recepción de la notificación, a menos que en ella se especifique una fecha ulterior.

3. La denuncia no afectará en modo alguno el deber de los Estados Partes de cumplir todas las obligaciones contenidas en la presente Convención a las que estén sometidos en virtud del derecho internacional con independencia de esta Convención.

Artículo 33 – Las Normas

Las Normas que figuran en el Anexo de esta Convención son parte integrante de ella y, salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta Convención constituye asimismo una referencia a las Normas.

Artículo 34 – Registro en las Naciones Unidas

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención deberá ser registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General.

Artículo 35 – Textos auténticos

Esta Convención se ha redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.

Anexo

Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático

I. Principios generales

Norma 1. La conservación *in situ* será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce de ese patrimonio.

Norma 2. La explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable es absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio. El patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de transacciones ni de operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial. No cabrá interpretar que esta norma prohíba:

- a) la prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios conexos necesarios cuya índole y finalidad sean plenamente conformes con la presente Convención, y tengan la autorización de las autoridades competentes;
- b) el depósito de patrimonio cultural subacuático recuperado en el marco de un proyecto de investigación ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre que dicho depósito no vulnere el interés científico o cultural, ni la integridad del material recuperado, ni dé lugar a su dispersión irremediable, esté de conformidad con lo dispuesto en las Normas 33 y 34 y tenga la autorización de las autoridades competentes.

Norma 3. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no deberán perjudicarlo más de lo que sea necesario para los objetivos del proyecto.

Norma 4. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático deberán servirse de técnicas y métodos de exploración no destructivos, que deberán preferirse a la recuperación de objetos. Si para llevar a cabo estudios científicos o proteger de modo definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario realizar operaciones de extracción o recuperación, las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo menos dañinos posible y contribuir a la preservación de los vestigios.

Norma 5. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático evitarán perturbar innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados.

Norma 6. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se reglamentarán estrictamente para que se registre debidamente la información cultural, histórica y arqueológica.

Norma 7. Se fomentará el acceso del público al patrimonio cultural subacuático *in situ*, salvo en los casos en que éste sea incompatible con la protección y la gestión del sitio.

Norma 8. Se alentará la cooperación internacional en la realización de actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático con objeto de propiciar intercambios eficaces de arqueólogos y demás especialistas competentes y de emplear mejor sus capacidades.

II. Plan del proyecto

Norma 9. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se elaborará el proyecto correspondiente, cuyo plan se presentará a las autoridades competentes para que lo autoricen, previa revisión por los pares.

Norma 10. El plan del proyecto incluirá:

- a) una evaluación de los estudios previos o preliminares;
- b) el enunciado y los objetivos del proyecto;

- c) la metodología y las técnicas que se utilizarán;
- d) el plan de financiación;
- e) el calendario previsto para la ejecución del proyecto;
- f) la composición del equipo, las calificaciones, las funciones y la experiencia de cada uno de sus integrantes;
- g) planes para los análisis y otras actividades que se realizarán después del trabajo de campo;
- h) un programa de conservación de los objetos y del sitio, en estrecha colaboración con las autoridades competentes;
- i) una política de gestión y mantenimiento del sitio que abarque toda la duración del proyecto;
- j) un programa de documentación;
- k) un programa de seguridad;
- l) una política relativa al medio ambiente;
- m) acuerdos de colaboración con museos y otras instituciones, en particular de carácter científico;
- n) la preparación de informes;
- o) el depósito de los materiales y archivos, incluido el patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y
- p) un programa de publicaciones.

Norma 11. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se realizarán de conformidad con el plan del proyecto aprobado por las autoridades competentes.

Norma 12. Si se hiciesen descubrimientos imprevistos o cambiasen las circunstancias, se revisará y modificará el plan del proyecto con la aprobación de las autoridades competentes.

Norma 13. En caso de emergencia o de descubrimientos fortuitos, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, incluyendo medidas o actividades de conservación por un periodo breve, en particular de estabilización del sitio, podrán ser autorizadas en ausencia de un plan de proyecto, a fin de proteger el patrimonio cultural subacuático.

III. Labor preliminar

Norma 14. La labor preliminar mencionada en la Norma 10 a) incluirá una evaluación de la importancia del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural y de su vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes del proyecto previsto, así como de las posibilidades de obtener datos que correspondan a los objetivos del proyecto.

Norma 15. La evaluación incluirá además estudios previos de los datos históricos y arqueológicos disponibles, las características arqueológicas y ambientales del sitio y las consecuencias de cualquier posible intrusión en la estabilidad a largo plazo del patrimonio cultural subacuático objeto de las actividades.

IV. Objetivos, metodología y técnicas del proyecto

Norma 16. La metodología se deberá ajustar a los objetivos del proyecto y las técnicas utilizadas deberán ser lo menos perjudiciales posible.

V. Financiación

Norma 17. Salvo en los casos en que la protección del patrimonio cultural subacuático revista carácter de urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al mismo se deberá contar con la financiación suficiente para cumplir todas las fases previstas en el plan del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del material recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

Norma 18. En el plan del proyecto se demostrará la capacidad de financiar el proyecto hasta su conclusión, por ejemplo, mediante la obtención de una garantía.

Norma 19. El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrumpirse la financiación prevista.

VI. Duración del proyecto - Calendario

Norma 20. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se preparará el calendario correspondiente para garantizar de antemano el cumplimiento de todas las fases del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del patrimonio cultural subacuático recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

Norma 21. El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrupción o conclusión del proyecto.

VII. Competencia y calificaciones

Norma 22. Sólo se efectuarán actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático bajo la dirección y el control y con la presencia continuada de un arqueólogo subacuático cualificado que tenga la competencia científica adecuada a la índole del proyecto.

Norma 23. Todos los miembros del equipo del proyecto deberán estar cualificados y haber demostrado una competencia adecuada a la función que desempeñarán en el proyecto.

VIII. Conservación y gestión del sitio

Norma 24. En el programa de conservación estarán previstos el tratamiento de los restos arqueológicos durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, en el curso de su traslado y a largo plazo. La conservación se efectuará de conformidad con las normas profesionales vigentes.

Norma 25. En el programa de gestión del sitio estarán previstas la protección y la gestión *in situ* del patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de campo y una vez que éste haya concluido. El programa abarcará actividades de

información pública, medidas adecuadas para la estabilización del sitio, su control sistemático y su protección de las intrusiones.

IX. Documentación

Norma 26. En el marco del programa de documentación, se documentarán exhaustivamente las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático incluyendo un informe sobre la marcha de las actividades, elaborado de conformidad con las normas profesionales vigentes en materia de documentación arqueológica.

Norma 27. La documentación incluirá como mínimo un inventario detallado del sitio, con indicación de la procedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado o retirado en el curso de las actividades dirigidas al mismo, apuntes sobre el trabajo de campo, planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros medios.

X. Seguridad

Norma 28. Se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad y la salud de los integrantes del equipo y de terceros, que esté en conformidad con las normativas legales y profesionales en vigor.

XI. Medio ambiente

Norma 29. Se preparará una política relativa al medio ambiente adecuada para velar por que no se perturben indebidamente los fondos marinos o la vida marina.

XII. Informes

Norma 30. Se presentarán informes sobre el desarrollo de los trabajos, así como informes finales de conformidad con el calendario establecido en el plan del proyecto y se depositarán en los registros públicos correspondientes.

Norma 31. Los informes incluirán:

- a) una descripción de los objetivos;
- b) una descripción de las técnicas y los métodos utilizados;
- c) una descripción de los resultados obtenidos;
- d) documentación gráfica y fotográfica esencial, sobre todas las fases de la actividad;
- e) recomendaciones relativas a la conservación y preservación del sitio y del patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y
- f) recomendaciones para actividades futuras.

XIII. Conservación de los archivos del proyecto

Norma 32. Las disposiciones sobre la conservación de los archivos del proyecto se acordarán antes de iniciar cualquier actividad y se harán constar en el plan del proyecto.

Norma 33. Los archivos del proyecto, incluido cualquier patrimonio cultural subacuático que se haya extraído y una copia de toda la documentación de apoyo, se conservarán, en la medida de lo posible, juntos e intactos en forma de

colección, de tal manera que los especialistas y el público en general puedan tener acceso a ellos y que pueda procederse a la preservación de los archivos. Ello debería hacerse lo más rápidamente posible y, en cualquier caso, no después de transcurridos diez años desde la conclusión del proyecto, siempre que ello sea compatible con la conservación del patrimonio cultural subacuático.

Norma 34. La gestión de los archivos del proyecto se hará conforme a las normas profesionales internacionales, y estará sujeta a la autorización de las autoridades competentes.

XIV. Difusión

Norma 35. En los proyectos se preverán actividades de educación y de difusión al público de los resultados del proyecto, según proceda.

Norma 36. La síntesis final de cada proyecto:

- a) se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la complejidad del proyecto y el carácter confidencial o delicado de la información; y
- b) se depositará en los registros públicos correspondientes.